

POPULISMO Y EXCLUSION EN LA ARGENTINA NEO-CONSERVADORA

Fernando Jaume*

Introducción

A pesar del optimismo que despertó la caída del Bloque Soviético y la terminación de la Guerra Fría, en las sociedades del capitalismo avanzado reina la incertidumbre y una extendida disconformidad. Las quiebras empresarias y financieras se suceden, mientras persisten elevadas tasas de desempleo e índices de pobreza, delincuencia y violencia social. La apatía y el descreimiento en las organizaciones partidarias campean en el dominio político, al tiempo que las grandes ideologías de la modernidad están bajo sospecha. El presente es catalogado como un momento de profunda crisis, cuyas causas distintos analistas tratan de desentrañar privilegiando determinados aspectos. Algunos (i.e. Muñoz de Bustillo, 1989; Lo Vuolo, 1991; Therborn, 1989) ponen el eje en el derrumbe del llamado "Estado de Bienestar", que provoca una profunda revulsión en: las organizaciones, los patrones que orientan los comportamientos individuales y grupales, los paradigmas interpretativos y las formas de legitimación, las políticas públicas y su implementación. Otros (i.e. Harvey, 1990; Froebel, 1990), apuntan el fracaso de las políticas keynesianas, o el agotamiento de la acumulación capitalista sustentada sobre este tipo de acuerdos.

Empero, no se trata simplemente de un problema aislado, focalizado en las estructuras del Estado. Por el contrario, es evidente que la economía, la política y la sociedad en su conjunto no funcionan adecuadamente y, si bien profundas transformaciones están en marcha, aun no se vislumbra la luz al final del camino. Harvey (1990), Froebel (1990), Sabel (1985), exploran particularmente el costado económico-productivo de las sociedades industriales avanzadas de post-guerra, señalando que la causa principal de la crisis es la caída drástica y generalizada de la tasa de ganancia capitalista. La crisis presente también se manifiesta como "la ruptura de un consenso" (Muñoz de Bustillo, 1989); vale decir: como una extendida crisis de hegemonía provocada por el distanciamiento entre los discursos y las justificaciones tradicionales de políticos, comunicadores, empresarios e intelectuales y la percepción y la experiencia cotidiana de los sujetos sociales (el 'sentido común' al que aludía Gramsci). Cabe incluso la sospecha de que la crisis sea el resultado de una operación ideológico-discursiva y que lo realmente en juego sea la instauración de un nuevo "modelo social de acumulación" (Grassi, *et al.*, 1994). En tanto este nuevo modelo impone substanciales sacrificios, su instauración requiere insuflar en la población una generalizada sensación de crisis.

Más allá de las aristas que se privilegien, hay acuerdo en que los enfoques unicausales no sirven para explicar la radical transformación que vive la sociedad capitalista en su conjunto, y que sacude irremediamente las estructuras de países de desarrollo intermedio como el nuestro. Conviene por tanto, considerar una pluralidad de causas, una configuración de fenómenos, procesos y circunstancias históricas interrelacionadas. Así por ejemplo Tenti Fanfani (1993), explicando el proceso de reconversión que vive América Latina señala los siguientes fenómenos mutuamente intervinclados: agotamiento de un modelo de acumulación; caída de las inversiones y de la producción; polarización del ingreso, de por sí extrema en la región; empobrecimiento generalizado de amplios estratos de la población; necesidades básicas cada vez más insatisfechas; disminución del gasto público; inestabilidad política; autoritarismo; intolerancia; etc.

En el marco de este revulsivo contexto internacional, el presente trabajo tiene precisamente por objeto analizar algunos aspectos del complejo proceso de transformación por el que atraviesa nuestro

* Docente e Investigador, Proyecto Procesos Hegemónicos, ideología y memoria popular en la Argentina. UNaM

país; proceso que afecta radicalmente al Estado, la sociedad y sus relaciones mutuas. Para ello, se comparan dos configuraciones que predominaron en distintos momentos del presente siglo: una regida por políticas keynesianas, que hizo posible cierto desarrollo del Estado de Bienestar y otra, dominada por la presente política neo-conservadora, encaminada a dismantelar las estructuras del Estado de Bienestar y abrir la economía al mercado mundial. Se señalan tanto, aspectos económicos, políticos, sociales e institucionales de la transformación en marcha, como las representaciones que se construyen a fin de deslegitimar el modelo perimido y apuntalar e imponer el presente.

Keynesianismo y Estado de Bienestar

Hacia la segunda década del siglo, Henry Ford instaló en su planta de automóviles de Detroit la primera cadena de montaje, revolucionando la organización del proceso productivo industrial (Harvey, 1990). Al mismo tiempo, implantó nuevas técnicas de control y supervisión del trabajo adoptando las propuestas de racionalización industrial del taylorismo. Este esquema básico de organización de la producción, que se conoció luego como fordismo-taylorismo se extendió, no sin resistencias, a otras ramas productivas y a otros países convirtiéndose hacia mediados de siglo en el modelo prototípico de la organización industrial capitalista.

Este esquema, destinado inicialmente a disciplinar al enorme contingente de inmigrantes europeos arribados a los EEUU y a convertirlos en mano de obra calificada para funcionar productivamente en un sistema de trabajo cooperativo de compleja coordinación, resultó en una verdadera "revolución cultural" (Gramsci, 1992). Ford trabajó activamente para cambiar el comportamiento de sus obreros tratando de evitar la deserción y el ausentismo. La elevada rotación de personal, en cuya capacitación había hecho fuertes inversiones, representaba una pérdida y el ausentismo perjudicaba el trabajo coordinado y estandarizado que hacía de la cadena de montaje un artificio efectivamente competitivo. Ford fue uno de los primeros empresarios en contratar especialistas de las ciencias sociales, sociólogos y trabajadores sociales, para investigar el modo de vida de sus obreros y para introducir cambios en su conducta: obligó a sus obreros solteros a casarse; a que abrieran cuentas bancarias de ahorro; impulsó

por todos los medios el control del consumo de alcohol y los instó a llevar 'una vida ordenada y de progreso'.

Lo realmente significativo es que Ford fue uno de los primeros grandes empresarios capitalistas en darse cuenta que **producción masiva significa consumo masivo**. Impuso en la sociedad norteamericana un modelo empresarial centrado en una nueva política de reproducción social basada en el bienestar para la mayor cantidad posible de habitantes, que a su tiempo garantizaría la compra de los productos que, en forma creciente, producía la industria. El fordismo-taylorismo significó a su tiempo la consolidación de un nuevo estilo de vida y de consumo, de una nueva psicología, e incluso de una nueva estética: la estética modernista de los productos industriales sólidos, duraderos, simples y prácticos. En suma, a partir del ejemplo de Ford se instauró una sociedad moderna, populista y, sobre todo satisfecha de sí misma. El fordismo-taylorismo no fue únicamente un hecho económico, sino que impregnó la totalidad de los aspectos sociales: fue una revolución cultural en el más amplio sentido que inventó un conjunto de valores, de necesidades y expectativas de consumo, alimentando el imaginario colectivo con la ilusión del progreso y el bienestar ilimitados. El fordismo creó un orden y una moral que, si bien sostenía la competencia, también se apoyaba en la cooperación compleja en el trabajo y en un conjunto de reglas de regulación y control concertadas entre los empresarios, los obreros y el Estado.

Este modelo de sociedad basado en el consumo de masas, obviamente alteró por completo la estructura previa del capitalismo industrial 'salvaje', basada en el liberalismo económico, en la lucha "darwinista" de todos contra todos, en donde el Estado quedaba al margen de toda intervención y los salarios los fijaba el mercado al nivel de subsistencia biológica. Empero, la extensión del modelo Fordista a otras empresas y a otros países no fue un proceso fácil ni lineal; por el contrario, despertó enormes resistencias en todos los sectores. Sólo fue posible después de la Gran Depresión de 1929, cuando la situación económica era tan catastrófica como para que los empresarios aceptaran cierto grado de intervención estatal y planificación centralizada, y cuando los elevados niveles de desocupación hicieron posible que los obreros sindicalizados acordaran trabajar en las monótonas líneas de ensamblaje que habían rechazado hasta entonces.

La instauración del fordismo-taylorismo fue posible por el compromiso asumido por los estados nacionales y la aplicación de políticas económicas keynesianas que emergieron hacia 1930 como una respuesta a la 'Gran Depresión', instalando una insalvable ruptura con el liberalismo. Estas políticas fueron acompañadas por la substancial extensión del sistema de seguridad social dando lugar al llamado "Estado de Bienestar"¹ (Isuani, 1991). Keynesianismo y EB no son un mismo fenómeno, ni respondieron a las mismas causas, pero se constituyeron en los dos componentes esenciales del capitalismo de post-guerra que, en buena medida, explican el vertiginoso crecimiento económico y la mejora en el nivel de vida de los trabajadores de las sociedades avanzadas. Las políticas keynesianas apuntaron a incrementar la inversión productiva y a regular el funcionamiento de las economías; se aplicaron por tanto con flexibilidad y operaron con criterio anticíclico. Por el contrario, las políticas del EB respondieron a causas político-sociales (extrema pobreza, problemas educativos, sanitarios y habitacionales, etc.); operaron en el campo del consumo y la redistribución y fueron mucho más rígidas, imponiendo derechos jurídicamente garantizados que terminaron por integrarse al sentido común de la población (Isuani, Op. Cit.).

El EB se extendió a las sociedades industriales avanzadas (y en menor medida a países de desarrollo intermedio como el nuestro), como una forma de colaborar con el mantenimiento del orden social, atendiendo a las cuestiones sociales más urticantes -de allí su orientación inicial hacia la clase obrera, la única lo suficientemente organizada como para encarar reclamos radicales- incrementando al mismo tiempo la estabilidad política del sistema y la legitimidad del Estado frente a una sociedad capitalista comprometida con el sufragio universal y la competencia política (García Delgado, 1994). El principio de seguridad predominó inicialmente sobre el de igualdad de los ciudadanos que recién comenzó a cobrar vigencia en Europa durante la Segunda Guerra Mundial y como base de las políticas para repartir más equitativamente los sacrificios impuestos a la población (Isuani, Op. Cit.).

Una vez terminada la guerra, los acuerdos keynesianos apuntaron a lograr pleno empleo, mientras el EB apoyó a los sectores excluidos, particularmente en los períodos recesivos. A cambio de reivindicaciones concretas en materia de ingresos y seguridad los obreros archivaron sus consignas más revolucionarias. La comunidad en general, y aun el empresariado, veía los gastos sociales como "inversión en capital humano" más que como consumo improductivo. Esta perspectiva se enlazaba con la extensión de los derechos sociales a la mayoría de la población y la expansión de los sistemas de servicios y seguridad social.²

En el plano político-institucional, el EB estuvo en correspondencia con la democracia pluralista y participativa, organizada en torno a los grandes partidos políticos que operaron como agregadores y canalizadores de las demandas sectoriales. El orden social también se articuló en torno a grandes actores colectivos: los sindicatos por rama productiva y sus confederaciones, las asociaciones empresarias, las entidades profesionales.

En suma, el crecimiento vertiginoso del capitalismo de post-guerra se opoó en tres instancias fundamentales:

1. la adopción de la organización productiva fordista-taylorista, que hizo posible la producción masiva de bienes;
2. las políticas económicas keynesianas que resultaron funcionales en la medida en que mediante la forzosa redistribución que impulsaron, incrementaron la demanda efectiva de bienes de consumo también adecuada para un capitalismo de producción masiva, barata y estandarizada;
3. la extensión del EB, que colaboró fuertemente en la formación de una clase obrera sana y educada, acorde con las necesidades de un capitalismo industrial desarrollado y altamente productivo.

Empero, si bien la estabilización de las economías, el crecimiento sostenido y la mejora sustancial en los niveles de vida confirieron fluidez al sistema, no todos fueron éxitos. Este modelo de organización promovió fuertes diferencias y fragmentación entre clases y sectores sociales: por ejemplo entre los obreros de los países centrales y los periféricos, o entre obreros sindicalizados y trabajadores esporádi-

¹ Tal como Isuani (1991) señala, el Estado de Bienestar (EB) tuvo sus inicios a fines del siglo pasado en la Alemania de Bismarck en la forma de 'seguro social' que rompió con la beneficencia estigmatizante existente hasta ese momento y orientándose principalmente hacia los asalariados más que hacia los pobres o indigentes.

² El concepto de seguridad social de post-guerra, que tiene su formulación más típica en la Inglaterra Laborista se asienta sobre dos principios básicos: 1. el acceso al consumo de los bienes y servicios sociales básicos debe independizarse del eventual aporte individual para su sostenimiento; 2. el

cos; incluso, entre obreros de diferente origen étnico.³ Hacia fines de la década del 60 aparecieron los primeros síntomas de crisis, y los problemas del estado benefactor y keynesiano se hicieron manifiestos con la llamada "crisis del petróleo" iniciada en 1972.

La Crisis del Estado de Bienestar

El reconocimiento del agotamiento de la vía keynesiana de acumulación y su parcial abandono, sólo fue posible con la generalización de la crisis en las economías avanzadas (prolongada recesión y empobrecimiento relativo) y con el consiguiente abandono de la optimista visión modernista del progreso ilimitado e irreversible. Hacia mediados de los años setenta, los empresarios y políticos de los países avanzados enfrentaban la certeza de que había terminado el ciclo del crecimiento inusitadamente rápido de postguerra (Sabel, 1985; Muñoz de Bustillo, 1989; Fröebel *et al*, 1990). Por su parte, los planificadores sociales descreían de la posibilidad de superar la pobreza y la desigualdad social por el simple crecimiento de las economías. Por el contrario, era previsible que en muchas naciones la acumulación de tensiones sociales derivadas del estancamiento, o del crecimiento económico casi nulo, resultara explosivo, pudiendo redundar en revoluciones y en guerras. Contrariando lo esperado, la pobreza y la violencia social volvían a instalarse en una Europa que aparentemente las había superado para siempre (Fröebel *et al*, 1990).

David Harvey (1990) señala que los síntomas de la crisis comenzaron a aparecer como "rigideces" instaladas en los mercados de trabajo, en las formas de contratación, en la legislación laboral, en la estructura piramidal de la organización fordista-taylorista, en las limitaciones a la circulación del capital, en las barreras arancelarias y las economías semicerradas, etc. No obstante, los primeros intentos por disminuir el poder de los sindicatos y rebajar los salarios culminaron en una ola de huelgas que conmovió a la mayoría de los países industriales entre 1968 y 1972

sistema no se orienta a satisfacer las necesidades de los trabajadores únicamente, sino las de todos los ciudadanos (Lo Vuolo, 1991).

³ Al menos en el caso de los EEUU, el fordismo impulsó una verdadera "segmentación" entre los obreros masculinos, blancos y sindicalizados y el resto de las categorías de trabajadores sujetos a salarios y condiciones de trabajo muy inferiores. De hecho, los negros quedaron al margen del modelo fordista durante varias décadas.

(Fröebel, *et al*, 1990). Las rigideces también afectaban los gastos estatales: demasiadas regulaciones y empleados que resultaron en déficits fiscales, impresión excesiva de dinero e inflación. Empero, estos eran los aspectos manifiestos de una causa más profunda: **la caída brusca de la tasa de ganancia en las empresas más importantes del sistema.**

La inflación de EEUU que debilitó la posición del dólar como moneda mundial y la decisión de la OPEC de elevar los precios del petróleo y de sabotear los embarques hacia aquellos países occidentales que apoyaban a los israelíes durante la guerra Árabe-Israelí de 1973, profundizaron las dificultades del sistema capitalista en su conjunto. El incremento vertiginoso del precio de los combustibles (a mediados de los años 70 el petróleo pasó de 1 ó 2 dólares a 30 dólares el barril), impulsó reconversiones tecnológicas y la puesta en marcha de programas para la búsqueda de fuentes alternativas de energía. El fortalecimiento de la OPEC alentó una rápida y fuerte acumulación de capital en manos de las élites dominantes en un puñado de países productores del Medio Oriente. A su tiempo, esta masa de dinero fue en buena parte reintroducida en el sistema financiero mundial exacerbando la inestabilidad existente. Esto redundó en inflación combinada con fuerte recesión que, hacia el año 1973 resultó ser la más dramática y extendida desde la década del 30 (Fröebel, *et al*, 1990).

En este contexto, Harvey (op. Cit.) señala la emergencia de un nuevo estilo de acumulación al que denomina: "acumulación flexible". El complejo proceso de implantación de este modelo de acumulación flexible implicó, entre otros fenómenos, la aparición de sectores productivos enteramente nuevos, nuevos servicios financieros, una fuerte innovación en el comercio, en las tecnologías y el gerenciamiento empresarial y financiero. Este drástico reacomodamiento, en donde la revolución en las comunicaciones y la disminución de costos en el transporte influyeron substancialmente, constituyó de hecho un achicamiento espacio-temporal del planeta, o lo que hoy conocemos como 'globalización de la economía'. Se incorporaron al sistema nuevas áreas, emergieron nuevos "silicon valleys" y se dieron profundas transformaciones en las llamadas "economías emergentes".⁴

⁴ Una década atrás este rótulo sólo se aplicaba a los nuevos países industriales del Sudeste Asiático.

Los acuerdos keynesianos entre gobiernos, empresarios y la clase obrera sindicalizada se fracturaron en diferentes puntos, al tiempo que en los mercados de trabajo se imponía la flexibilización. Esto significó para los países desarrollados -especialmente EEUU bajo las presidencias de Ronald Reagan y George Bush y Gran Bretaña durante los años de auge tatcherista- la reimplantación de normas regresivas de contratación de la mano de obra, semejantes a las de los comienzos de la revolución industrial y que al presente sólo persistían en los países del Tercer Mundo: trabajo domiciliario, pago a destajo, cuentapropismo de bajos ingresos, contrataciones precarias al margen de la legislación. La precarización en las condiciones de trabajo, la desocupación y el incremento de la pobreza han llevado incluso a pensar que estamos en presencia de una tendencia hacia la "tercermundización" de los países del Primer Mundo. La quiebra de los acuerdos keynesianos que garantizaban el pleno empleo y la necesidad de los empresarios de conseguir mano de obra más barata para incrementar la competitividad de sus industrias derivó en la apertura de las fronteras a trabajadores del Tercer Mundo. La intensificación del traslado de trabajadores hacia las economías avanzadas promovió, no sólo la caída de los salarios y el debilitamiento de las organizaciones sindicales, sino también el incremento de las tasas de desempleo y la emergencia de guetos marginales y bolsones de pobreza.⁵

Los mercados de trabajo sufrieron una radical reestructuración, con la creciente prevalencia de contratos flexibles, precarios, de corto plazo y de medio tiempo. Variadas formas de subcontratación, que eximen a las grandes empresas de todo compromiso laboral, son comunes hoy en día en todos los países. En las sociedades avanzadas, el mercado de trabajo aparece integrado por: 1) un núcleo, muy achicado en número, que incluye trabajadores altamente calificados, polifuncionales, de tiempo completo, con status permanente, que gozan de amplia cobertura en términos de seguridad contractual, beneficios sociales, buenas posibilidades de promoción y capacitación laboral en las propias empresas, jubilaciones, retiros, etc.; y 2) una periferia conformada por dos grupos muy diferentes: uno integrado

por trabajadores calificados, de tiempo completo, pero que carecen de las seguridades de contratación y los beneficios sociales de los trabajadores centrales, y una segunda y muy nutrida periferia, constituida por trabajadores en condiciones variables de contratación que incluyen todas las formas de trabajo parcial y temporario (Harvey, 1990). Este último grupo es el más numeroso, el que crece más rápidamente según las tendencias de las últimas décadas, el más sujeto a rotación ocupacional y por supuesto, el más expuesto a las variaciones en el nivel de actividad económica; vale decir, es el grupo que opera como "colchón" de los ciclos económicos.

Otro indicador significativo de los cambios recientes en la economía mundial es el desplazamiento geográfico de la producción, uno de cuyos mecanismos consiste en suspender una línea productiva en una empresa del país central para continuarla en una filial de la misma corporación instalada en un país subdesarrollado. Es así que las inversiones en el extranjero de las empresas europeas y norteamericanas han crecido en los últimos veinte años, al tiempo que ha disminuido la tasa de inversión interior. Mientras nuevas fábricas se instalan en las áreas emergentes, viejas regiones industriales se desindustrializan. Al mismo tiempo, el dinero remanente invertido en las economías centrales se ha orientado en gran medida hacia la racionalización y la automatización profundizando, más que aliviando, el desempleo abierto.

La movilidad laboral se ha incrementado en un mercado muy dinámico con actividades productivas nuevas. Muchos trabajadores calificados se han visto obligados a aceptar trabajos de menor calificación; la educación como vía de ascenso laboral -y por ende socio-económico- no aparece hoy con la misma nitidez de antaño y las propias empresas invierten menos en la capacitación de su personal. El resultado es una considerable cantidad de trabajadores pugnando por

⁵ La migración de población en busca de trabajo y mejores condiciones de vida profundizó la fragmentación interna de la clase trabajadora. Si bien la nacionalidad y la pertenencia étnica real o imaginada, —las clasificaciones raciales que explícita o implícitamente instituye una sociedad— han

funcionado en otros contextos sociales y otras coyunturas históricas como un mecanismo exclusionario en los mercados de trabajo (Wolf, 1987); lo realmente novedoso en las últimas décadas, es que estos mecanismos están operando a gran escala en un mundo post-fordista estrechamente integrado, que ha dado lugar a una inusitada diáspora de trabajadores. Así, tenemos caribeños en Londres, turcos en Alemania, argelinos en Francia, latinoamericanos en España y EEUU, etc. El resultado es una mixtura de trabajadores de diferentes orígenes y culturas que simultáneamente han acentuado las jerarquías, la estratificación, la segmentación y los conflictos al interior de la clase trabajadora.

mantener el precio de venta de su fuerza de trabajo, intentando adaptarse rápidamente a las condiciones de un mercado laboral inestable y a una situación de incertidumbre y precarización agravada día a día.

En los países europeos el abandono de las políticas keynesianas no ha significado necesariamente el desmantelamiento completo del EB. Los subsidios de desempleo se han mantenido e incluso incrementado como recaudo para conservar la legitimidad, que de otro modo se vería totalmente corroída por el proceso de ajuste y reconversión.

En las economías subdesarrolladas la situación es muy diferente. El problema del desempleo es mucho más dramático, dado que el disciplinamiento de la fuerza de trabajo por la vía del paro forzoso - ítem claramente incluido en los programas de ajuste al margen de los discursos oficiales- se lleva adelante en ausencia de una política de reconversión laboral, de seguro de desempleo y de otras medidas anticíclicas. Como resultado, el peso del ajuste no se reparte entre todos los sectores sociales sino que recae sobre los más pobres; se da una nueva vuelta de tuerca en la acumulación concentrada en pocas manos; el ahorro nacional se orienta hacia el consumo suntuario más que hacia la reinversión productiva y se produce un gran descontento, base para una nueva frustración colectiva. En los países del Tercer Mundo, pocos son los realmente integrados al llamado "sector moderno" de la estructura productiva. La modernización de la agricultura, que se hace a costa de la desaparición de una parte de las unidades productivas familiares, redundante en migración rural-urbana y crecimiento de los asentamientos marginales en las capitales y grandes ciudades. El enorme reservorio de fuerza de trabajo que las nuevas condiciones de producción han hecho emerger, constituye una fuente potencialmente utilizable, pero no necesariamente ocupada por el sistema productivo. La existencia de este 'recurso natural' está precisamente en la base del singular proceso de industrialización que se observa en algunos países subdesarrollados.

La novísima industrialización, que suele ofrecerse como el "milagro económico de las economías emergentes del Área del Pacífico, presenta características muy particulares: gran parte de la producción está destinada a la exportación; el proceso está dominado por empresas e inversores extranjeros y lo que habitualmente se constituye es un sector industrial poco integrado, que a veces no supera el nivel de ensamblaje y por tanto, depende substancialmente de

tecnología, insumos y materias primas importadas. Esta industrialización se inserta muy precariamente en las economías nacionales receptoras. Puede decirse que, en ocasiones, su único contacto con la economía local está dado por la utilización de la fuerza de trabajo doméstica; por lo demás, se trata de enclaves totalmente aislados, como es el caso de las 'maquiladoras' en los estados del norte de México.

La dispersión del proceso productivo en enclaves distribuidos a lo ancho del planeta es hoy en día posible por la conjunción de una serie de circunstancias:

1. la intensificación de la transnacionalización del capital y de la mano de obra,
2. la planificación, supervisión y control técnico a distancia (vía fax y computadora) de los procesos productivos y,
3. la conversión de los mercados financieros y de bienes en un único mercado mundial.

En suma, se ha alcanzado una inédita globalización de la economía que hace posible, por primera vez en la historia mundial, que la industria de transformación reúna condiciones técnicas que le permiten insertarse con rentabilidad en el mercado mundial, produciendo en gran escala y con un volumen creciente en los países en desarrollo, optando en cada caso por la combinación más favorable de capital y trabajo (Fröebel *et al.*, 1990).

Todo esto ha reorientado sensiblemente los conflictos laborales, las luchas sociales y las vías por las que se canalizan las demandas. El poder de los sindicatos y su representatividad como organizaciones, ha decrecido correlativamente con el crecimiento de la mano de obra no sindicalizada, del sector informal y de los trabajadores migrantes. Si bien muchas empresas familiares están ligadas al mercado mundial -porque producen para multinacionales- su conexión está mediatizada por numerosos intermediarios, en un proceso de trabajo disperso prácticamente por todo el planeta. En este proceso de atomización del trabajo, donde cada familia opera como unidad *cuasi* autónoma, ensamblando, cosiendo o armando pequeñas piezas, los conflictos se diluyen -aunque no se resuelven- al hacerse menos evidente la figura del empresario. En las empresas familiares el patrón suele ser un pariente al que no es fácil iniciarle una huelga en demanda de mejores condiciones de trabajo.

Este nuevo estilo "flexible" de acumulación suma otras características que son de destacar: 1) producción en pequeñas partidas, sobre todo para

actualizar inmediatamente los modelos, de modo de adecuarse rápidamente a los cambios de gustos en los mercados (lo que torna poco competitivas las grandes fábricas típicas de la organización fordista, preparadas para una producción masiva pero poco diversificada); 2) creciente participación laboral de la mujer (se trata de una mano de obra más barata y con menos tradición sindical) y fundamentalmente; 3) una aceleración en la rotación, tanto del capital y la fuerza de trabajo, como del consumo.⁶ Esto significa una tendencia del capitalismo a producir "eventos" más que bienes durables, como lo muestra el impresionante desarrollo de la industria del espectáculo; producto que se consume instantáneamente creando continuamente la necesidad de su renovación: shows, torneos deportivos, cine, video, parques de diversiones de todo tipo, etc. se han multiplicado por todo el planeta. Como es de esperar, este mundo 'post-moderno' centrado en el espectáculo ha producido cambios en la estética: desde la valoración y el consumo de productos relativamente estables del modernismo, hacia una estética en la que prima la inestabilidad, el cambio continuo, el fermento, la celebración de la mezcla (i.e. los shoppings de la Capital Federal) y la diferencia. El espectáculo, la moda y la mercantilización creciente de las formas culturales son los signos de la época.

La creciente debilidad de los estados frente a las grandes corporaciones transnacionales (financieras y/o industriales) es también un componente del presente modelo que está en la base de la fractura de los equilibrios del período fordista. Los Estados tienen por delante la contradictoria tarea de regular la economía en el dominio nacional (por ejemplo cobrar más impuestos) y al mismo tiempo obligados a brindar una imagen mucho más empresarial y crear un clima favorable, encaminado a asegurar el ingreso de capital extranjero. Deben impulsar a rajatabla dolorosos programas de ajuste impuestos por organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial mientras se ven al mismo tiempo compelidos a neutralizar las demandas sindicales y otros fuertes intereses económico-políticos; todo ello, en el preciso momento en que su legitimidad ha sido

profundamente erosionada y su capacidad de fiscalización e intervención disminuida.

La implementación del modelo post-fordista de organización económica tiene también efectos en el campo de la lucha político-ideológica y en el ámbito académico, que es el que provee los argumentos de legitimación; a su tiempo, estos efectos realimentan las tendencias económicas. Se asiste a la destrucción de los paradigmas universales, o de las grandes "narrativas": el marxismo por izquierda, lo mismo que el desarrollismo por derecha han caído en un gran descrédito, tanto en su carácter de teorías económicas, como en el modelo de sociedad que propugnaban. La propia idea de "desarrollo" y las teorías de la modernidad han perdido su lugar como paradigma oficial, desde que no ha sido posible conjugar crecimiento y modernización con eliminación definitiva de la pobreza y la desocupación (Escobar, 1988 y 1992; Ferguson, 1990). Los paradigmas universales han sido en buena medida reemplazados por el pragmatismo post-moderno que es tan marcado en el arte, el espectáculo, la filosofía y el eclecticismo de los gustos, como en las formas de contratación de la fuerza laboral y en la organización de los procesos productivos.

La globalización de la economía es también la globalización de la producción cultural, hecho que, por ejemplo, acelera el proceso de copia y adopción de modelos, teorías e ideologías por parte de los intelectuales de los países subdesarrollados. Es así que en nuestro país, siguiendo los lineamientos de las economías avanzadas, el Estado ha debido ser "satanizado" a fin de imponer el modelo económico neo-liberal o neo-conservador. De la noche a la mañana se lo convirtió en el culpable de todos los males, y sus empresas, aparatos e instituciones de control y fomento fueron desmanteladas. Desde sus propias estructuras se han formulado los mensajes que nos han convencido que el Estado es un mal administrador, un mal empresario, que no debiera intervenir en la economía y que aún las actividades educativas y de bienestar social -que eran su prerrogativa y su obligación-, deben privatizarse en provecho de todos.⁷

⁶ En la medida en que, tanto en las sociedades avanzadas como en las del Tercer Mundo, se ha profundizado la brecha entre pobres y ricos, la aceleración de la rotación del consumo está en directa correlación con una parte de la población que consume cada vez más y una mayoría que no cubre

siquiera sus necesidades mínimas en materia de alimentos, vivienda o indumentaria.

⁷ Empero, la pretendida mayor eficiencia de las empresas privadas en relación con el Estado se basa muchas veces en anécdotas, ideología y apreciaciones parcializadas, más que en una base contundente de información

Este proceso ideológico de construcción e imposición de un discurso hegemónico antiestatista ha funcionado de manera parecida en todos aquellos países que adoptaron un modelo económico neo-conservador. Empero, éste no ha sido un proceso simple y lineal de transformación, sino por el contrario, plagado de contradicciones y de luchas: por los espacios de poder, por la distribución de la riqueza, por la imposición de símbolos y modelos de conducta y de consumo. Emergen así nuevas formas de organización tanto de la familia, como de los grupos y las propias naciones. En general, la prédica neo-conservadora se ha basado en la búsqueda de una respuesta mágica, proponiendo una vuelta al pasado, como si la sociedad capitalista pudiese retrotraerse a lo que fue antes de 1930 (García Delgado, 1994). En consecuencia, se exige la libertad de los mercados, la retirada del Estado, la disolución de los sindicatos y la eliminación de subsidios y compensaciones sin reconocer que: 1) la tan mentada libertad de mercado es en buena medida una falacia;⁸ 2) que el Estado ha sido y sigue siendo responsable por el rápido crecimiento y el bienestar de post-guerra; 3) que subsiste una amplia gama de actividades necesarias, pero deficitarias o poco rentables, que requieren subsidios y que; 4) en última instancia, el objeto de la economía no es la búsqueda de la ganancia *per se* sino del bienestar y la dignidad de los seres humanos (Muñoz de Bustillo, 1989; Fanfani, 1993).

El pasaje a esta etapa global y flexible del capitalismo ha incidido también en las formas de organización y participación social. Gran parte de la población, tanto de los países centrales como de los del Tercer Mundo, ha dejado de confiar en las grandes ideologías políticas, en las estructuras político-partidarias, en el Estado y en los organismos multinacionales de desarrollo, para comenzar a confiar en formas alternativas de organización. Sociólogos y politicólogos (Touraine, 1985; García Delgado, 1994; Escobar, 1988; Offe, 1992) señalan el papel crucial que hoy cumplen los llamados "nuevos movimientos sociales" encarando proyectos y canalizando las de-

mandas de sectores sociales tan dispares como los ecologistas, los que luchan por la paz, por los derechos de los homosexuales, los movimientos comunales, o las organizaciones por los derechos humanos.⁹ Los Nuevos Movimientos Sociales han obligado a replantear completamente la relación entre Estado y sociedad civil y la concepción y las formas de hacer política. Como señala Clauss Offe (1992) se incrementa la apelación a ideologías participativas, el empleo de formas no institucionales de participación política y la conversión en problemas políticos de temas que antes se consideraban morales y privados (ej. el aborto) o económicos (ej. la humanización del trabajo). Los ciudadanos de los países desarrollados recurren en número creciente a canales no convencionales de demanda frente al Estado. Independientemente de la valorización de estas tendencias -algunos pensadores las visualizan como una peligrosa erosión de lo político y otros, por el contrario, como novedosas formas de incrementar la participación popular en las decisiones colectivas- lo que se cuestiona en todos los casos desde los nuevos movimientos sociales es la representatividad de los partidos políticos y la eficacia de los canales tradicionales de vinculación entre los ciudadanos y el Estado y sus agentes.

El Estado de Bienestar en la Argentina

Puede decirse que el estado keynesiano comenzó en Argentina hacia mediados de la década del 30 con la implementación del llamado "Plan Pinedo-Prebisch", que dio inicios a una etapa de fuerte intervención estatal en la economía a través de la fundación de un Banco Central con una política monetaria activa e independiente de las fluctuaciones de la libra esterlina; la creación de organismos reguladores como la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, la CRYM, y el desarrollo de empresas estatales en las industrias metalúrgica, bélica y en el área de combustibles (i.e. YPF, YCF). Este modelo intervencionista será llevado a su máxima expresión durante los años del gobierno peronista (1945-1955) en que las políticas de bienestar se hacen extensivas

(Muñoz de Bustillo, 1989).

⁸ El comercio mundial es hoy, cada vez, más tráfico entre filiales de un mismo grupo industrial o entre empresas ligadas por subcontrataciones, pero no libre comercio. Harvey (Op. Cit.) señala que entre el 50-70% de las transacciones comerciales internacionales tienen lugar entre empresas asociadas. Así, los precios de las transacciones no surgen de la competencia en los mercados, sino de la ecuación que cada grupo corporado diseña a fin de maximizar su ganancia global.

⁹ Han incluso proliferado profetas y sectas que proponen la salvación individual según recetas más o menos mágicas o pseudo-científicas, como el movimiento carismático, la "new age", el orientalismo, la concentración mental y numerosas variantes del fundamentalismo religioso. Como sugiere Tenti Fanfani: "No es tiempo de sacerdotes y administradores de verdades establecidas sino de profetas y creadores de lenguajes." (1993: 269). Es decir, no es tiempo de partidos socialdemócratas sino de Fujimoris.

a amplias fracciones de población y el estado empresario se hace cargo de los servicios básicos y el transporte (electricidad, teléfonos, ferrocarriles).

Los gobiernos peronistas han incidido en la trayectoria seguida por el país en los últimos 50 años de manera realmente significativa. La política de Perón ha sido analizada desde distintas ópticas político-ideológicas e incluso es a partir del peronismo que se produce una clara contraposición entre dos corrientes históricas -liberales y revisionistas- que se disputan la "verdadera" interpretación de la historia del país (Neiburg, 1993; Plotkin, 1993; Sigal y Verón, 1988). El debate en torno al peronismo ha dividido al país entre defensores y detractores que enfatizan distintos aspectos de una realidad polifacética y multiforme tratando de llevar agua hacia uno u otro molino. Hay acuerdo en que el peronismo utilizó extensamente las estructuras del Estado para reimpulsar el proceso de industrialización iniciado en la década anterior (y esencialmente limitado a la producción de bienes de consumo) y en esa línea funcionó como "integrador" de una "nueva clase trabajadora"¹⁰, que venía formándose, particularmente en Buenos Aires y en las grandes ciudades del Litoral. El Partido Justicialista en función de gobierno, colaboró activamente en el 'disciplinamiento' de los trabajadores recién arribados del interior y de los países limítrofes ayudando a su inserción en el proceso productivo. Mediante una combinatoria de paternalismo y autoritarismo, el peronismo organizó a la clase obrera en una central sindical única bajo control directo del presidente. Su incorporación al sistema involucró, no sólo un costo económico y de entrenamiento y disciplinamiento, sino también su legitimación ante los ojos de las otras clases sociales que componían la sociedad argentina.¹¹ Por aquellos años emergieron calificativos denigratorios tales como el "aluvión zoológico" y los 'cabecitas negras'. Perón retomó esos epítetos, con los que las clases medias y altas de Buenos Aires recibieron a los obreros y pobres criollos, les dió un

nuevo significado y los utilizó como sustento de su prédica en defensa del "pueblo enfrentando a la oligarquía". Obviamente, en pocos años logró organizar una nutrida clientela política que le garantizó su éxito electoral. Más allá de los aciertos o errores que se le atribuyan al justicialismo y sus períodos de gobierno, lo cierto es que el partido de Perón produjo una fuerte revulsión, no sólo en el dominio económico estricto, sino también en las relaciones sociales entre los principales estamentos de la nación, en los estilos políticos, en las ideologías políticas y sociales y en el imaginario colectivo (Neiburg, 1993).

El estado keynesiano y de bienestar tal como se desarrolló en las economías avanzadas involucró tres componentes básicos: 1) intervención estatal en la economía encaminada a mantener el pleno empleo, o al menos un alto nivel de ocupación; 2) provisión pública de un conjunto de servicios sociales universales, es decir, orientados a todos los estratos de la sociedad independientemente de sus niveles de ingreso; 3) una filosofía de fondo basada en la noción de responsabilidad estatal entendida como un derecho social y no como caridad pública hacia una minoría y encaminada, por tanto, a garantizar condiciones mínimas de vida y de seguridad a todos los ciudadanos (Mishra, 1989). En los países del Tercer mundo el EB no alcanzó en general un desarrollo semejante. A este respecto, nuestro país se ubica en situación intermedia. Si bien durante el primer período Justicialista se organizó un aparato de bienestar y seguridad social orientado hacia poblaciones específicas, que propugnaba la dignificación de los trabajadores, los pobres, las mujeres, los niños, y que incluso atacó frontalmente instituciones simbólica e ideológicamente comprometidas con el modelo de Estado paternalista que reparte caridad (i.e. Sociedad de Beneficencia); al mismo tiempo, persistieron un discurso paternalista y una práctica basada en la distribución gratuita de bienes y en el uso de las propias instituciones estatales para el otorgamiento de favores y prebendas.¹² Es decir, una política y un discurso dual que no sentaron claramente los derechos sociales

¹⁰ Respecto del debate sobre el carácter de esta "nueva clase obrera" ver Murnis y Portantiero, 1971.

¹¹ Así como Yrigoyen incorporó al 'imaginario colectivo' dominado por la visión del mundo sustentada por la 'oligarquía', esa "chusma" de inmigrantes italianos, españoles y polacos; Perón hizo lo propio con la nueva clase obrera formada durante la industrialización de los años treinta y cuarenta ampliando el horizonte ideológico, incorporando al imaginario nacional esa población criolla, de piel oscura, proveniente del interior: en fin, "la parte negada del país".

¹² Frente al universalismo como filosofía de fondo de las políticas sociales de las economías avanzadas destinadas por igual a todos los ciudadanos, en nuestro país, la implementación de este tipo de políticas "no está ligada a la expansión de la ciudadanía, sino a la constitución misma de otra categoría:

de todos los ciudadanos a participar de la riqueza nacional y que, por el contrario, hicieron depender las mejoras otorgadas de la buena voluntad de los gobernantes (Grassi, *et al*, 1994; García Delgado, 1994).

Con la "Revolución Libertadora" tienen lugar los primeros cuestionamientos desde la trinchera liberal-conservadora que propugnan la desregulación de la economía y el desmantelamiento del EB. Si bien los "intelectuales orgánicos de la oligarquía" retornan al poder, a mediados de la década del cincuenta el mundo capitalista atravesaba una etapa de acelerado crecimiento dominada por las ideas desarrollistas y no ya por el liberalismo. Era, por otra parte, absolutamente inviable retrotraer el país a su estadio agropecuario; de modo que el Estado mantuvo a grandes trazos su política social y los derechos laborales consagrados por la legislación conservaron sus aspectos substanciales, si bien la política económica pasó del redistribucionismo justicialista a salarios deprimidos mediante el soporte de la represión militar. Mientras en el plano económico se abre una etapa de rápida acumulación, sostenida por las bajas salariales, las periódicas devaluaciones y la represión de la actividad sindical; en el plano político el gran problema consistía en cómo liquidar o al menos neutralizar al peronismo que seguía influyendo a pesar de su proscripción (Neiburg, 1993).

Liberalismo y desmantelamiento del Estado Benefactor

Si bien las protestas empresarias contra el Estado empresario nunca se acallaron, antes del régimen militar instalado en 1976 pocos dudaban de la legitimidad del Estado y de la necesidad de su intervención en la provisión de los servicios básicos, la seguridad social, la educación, la salud, etc. Tampoco eran demasiado cuestionadas las empresas estatales de servicios como teléfonos, transportes, electricidad, considerados estratégicos para la seguridad nacio-

nal, si bien se apuntaba la necesidad de disminuir sus déficits operativos. A mediados de la década del setenta, un conjunto de causas externas y domésticas confluyeron para que esta imagen tolerada del Estado se pusiera en cuestión, abriendo el camino para su indiscriminado desmantelamiento. En primer lugar, el discurso conservador-liberal se torna hegemónico en países centrales como Gran Bretaña o los EEUU y se propaga a los países del Tercer Mundo creando el clima ideológico propicio para que la prédica antiestatista se instale en la conciencia de nuestra población. En consonancia con ello, los EEUU y los organismos multinacionales impulsan programas de ajuste, desregulación, flexibilización y apertura económica y reparten premios o castigos a los países del Tercer Mundo de acuerdo con el grado de acatamiento de esta propuesta.¹³

En el nivel local, se hace evidente el agotamiento del proceso de acumulación basado en: la sustitución de importaciones y el mercado interno. El continuo e interminable proceso de ajuste -iniciado durante la nada bien recordada gestión de Celestino Rodrigo al frente del Ministerio de Economía- impuesto por la necesidad de equilibrar las cuentas fiscales, derrotar la inflación o 'disciplinar' la economía (Canitrot, 1980), se ha mantenido hasta el presente sin que se volviese a hablar seriamente de un programa de desarrollo. Hacia fines de la administración del presidente Alfonsín, en un contexto signado por la hiperinflación, el estancamiento, el agobio de la deuda externa, los crecientes déficits públicos y los brotes de violencia colectiva, la "nueva derecha" (Nun, 1994), de la mano del menemismo logró imponer con relativa facilidad su ideología y su política. La prédica ideológica se fundó en presentar el ajuste drástico como la única solución. Mediante operaciones ideológico-discursivas se construyeron los 'enemigos' y se señalaron los culpables de los males de la nación: la hiperinflación, el caos heredado del alfonsinismo, las empresas estatales, los sindicatos y las leyes laborales. Estas operaciones fueron lo bastante exitosas -hegemónicas- como para descargar el

imposibilitados de integrarse al mercado laboral por razones ajenas a su voluntad: i.e. invalidez, vejez, viudez. Pero se constituyó entorno a un sujeto definido como vergonzante, "el pobre por desocupación" (Grassi *et al*, *Ibidem*). En la Argentina peronista de la justicia social y del "capitalismo humanizado" aquellos que no trabajaban no lo hacían más que por desajustes personales: "en la Argentina no trabaja el que no quiere" formaba parte de la retórica cotidiana de la clase media.

¹³ No obstante, en Inglaterra o EEUU durante las administraciones conservadoras de Margaret Thatcher y Reagan-Bush respectivamente, la prédica ideológica antiestatista chocó contra una sociedad civil con mayor capacidad defensiva que en nuestro país y culminó en un absoluto fracaso. En ninguno de estos casos se produjeron privatizaciones substanciales, ni se disminuyó el gasto público en bienestar; si bien, las prestaciones cambiaron de signo orientándose en mucha mayor medida hacia el subsidio y la atención de la creciente masa de desempleados generada por el propio modelo económico (cf. Therborn, 1989; Roberti, 1989).

peso de la reconversión sobre las espaldas de los sectores menos favorecidos, sin necesidad de interrumpir el juego democrático, ni apelar a la represión abierta, y sin que se produjeran conflictos masivos que pudieran poner en peligro el sistema mismo.¹⁴ La represión de los años setenta, que destruyó en buena parte el tejido social, aniquiló una generación de líderes políticos y sindicales y fragmentó las organizaciones sociales orientando a la población hacia soluciones individuales e impidió asimismo la constitución de una oposición más radical y movilizadora (García Delgado, 1994).

Presente y Perspectivas del Modelo Exclusionario y Populista

Las transformaciones sufridas por el país durante estos últimos años como resultado de la aplicación de un modelo económico neo-conservador pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

El Estado: se ha producido un substancial achicamiento del estado empresario o productor. El Estado ha perdido buena parte de sus capacidades técnicas y jurídicas de planificación, fiscalización y control. Su creciente debilidad frente al sistema productivo, implica el fin del keynesianismo y redundancia en la extensión de la 'lógica del mercado' que, en el caso concreto de nuestro país refuerza las tendencias al crecimiento de los monopolios y oligopolios, aumenta el descontrol en el uso de los recursos, acelera la destrucción del medio ambiente y facilita todo tipo de abusos sobre la fuerza de trabajo. El EB ha sido asimismo vaciado desde dentro y, paradójicamente, la propia incapacidad que hoy exhibe para solucionar los problemas socio-económicos más acuciantes -el desempleo, el hambre, la falta de viviendas y servicios urbanos, la violencia, la inseguridad, la ausencia de proyectos y metas colectivas- lo deslegitima frente a la sociedad civil, que cuestiona no sólo su ineficiencia, sino su misma razón de ser y

justifica el asalto final sobre los restos del botín.

Políticas de ajuste: las políticas diseñadas para detener la crisis han tenido éxito frenando la inflación y estabilizando la moneda por un lapso desacomodadamente prolongado para la experiencia de las últimas décadas. Pero al mismo tiempo, estas políticas han incidido negativamente sobre el mercado de trabajo, llevando la desocupación, la subocupación y la pobreza a niveles desusadamente elevados para los parámetros normales de nuestro país. Dadas las políticas de ahorro de mano de obra que priman en la industria, la saturación de personal en la administración pública y la desaceleración de la actividad económica prevista para los próximos años, es probable que se acentúen las tendencias que se observan hoy: 1) incremento del desempleo; 2) desasalarización y expansión del cuentapropismo; 3) acentuación de la fragmentación de las ocupaciones en términos de incorporación desigual del conocimiento científico y técnico; 4) redefinición de sistemas normativos (desregulación, flexibilización y precarización de la fuerza de trabajo); 5) distribución concentrada del ingreso y fragmentación del salario en el interior de las ramas de actividad, en un contexto de baja promedio de los salarios (Tenti Fanfani, 1993). La descentralización y parcial privatización en áreas como educación y salud también han generado una fragmentación inédita en estos ámbitos, creando marcadas diferencias, tanto de las condiciones laborales como en los salarios. La variedad de categorías de trabajadores precarios redundancia en fragmentación de la clase obrera y debilita su identidad social. Obviamente, ello incide negativamente sobre las posibilidades de organización, desde que los clivajes internos a la clase obrera se traducen en percepciones y conductas diferenciales frente a los mismos problemas.

Viejos y nuevos excluidos: los niveles inéditos de desocupación abierta y encubierta alcanzados por la Argentina -un país tradicionalmente carente de una reserva abultada de mano de obra- se manifiestan como una gran variedad de situaciones de exclusión social: desempleo total, subempleo, cuentapropismo, informalidad. La profunda fragmentación de posiciones y situaciones sociales, la necesidad de priorizar la conservación de una posición en un panorama que indica posibilidades de empeoramiento, la secuela de la represión (miedo, desconfianza, destrucción física

¹⁴ Mishra (1989) señala que en Inglaterra se aceptaba como un indicador de conflicto, que superado un tope de medio millón de desocupados la violencia podría resultar imparables, sin embargo la política del régimen thatcherista llevó hacia 1985 la desocupación a 4 millones de parados, el 13,2% de la PEA -en un país que durante los años cincuenta y sesenta tuvo tasas de desempleo de entre el 1 y el 2%- sin que estallara la temida 'revolución'.

de una generación de líderes comprometidos), la propia informalización o disminución de la sindicalización, la disminución relativa y absoluta de los proletarios industriales (históricamente los más organizados y combativos); el proceso de cooptación de líderes gremiales hábilmente instrumentado desde el gobierno; todo ello, impide la conformación de la clase obrera como actor colectivo y protagónico.

Hoy está en marcha un proyecto de ley de "flexibilización laboral" que rompe drásticamente con la tradición de seguridad y defensa de los llamados "derechos adquiridos" en materia de contratos laborales. Se ha modificado el sistema jubilatorio agregando incertidumbre y en muchas actividades productivas se busca alterar el nomenclador de tareas, que constituye la base sobre la que se discuten los convenios colectivos de trabajo, tanto en la categorización de los oficios y la asignación de responsabilidades laborales, como en la fijación de los salarios. Los empresarios reclaman la incorporación de la modalidad de polifuncionalidad obrera y la flexibilización de las formas contractuales. Sin abrir juicio en favor o en contra de la necesidad y oportunidad de introducir estos cambios, lo cierto es que en un contexto inédito de desocupación, con el retiro del Estado y del Ministerio de Trabajo de sus obligaciones fiscalizadoras, los cambios que se avecinan implican un reacomodamiento de los trabajadores a nuevas reglas de juego, a nuevos sistemas de incentivos y castigos y a nuevas responsabilidades que, obviamente despiertan fuertes resistencias.

Deslegitimación: estamos inmersos en un proceso de deslegitimación social sistemática de las instituciones públicas en cuanto al desempeño de sus tareas y responsabilidades específicas, y bajo el influjo de la difusión sostenida de una visión genéricamente antiestatista y privatista. En referencia a las sociedades avanzadas, Muñoz de Bustillo (op. cit) sugiere que la prédica deslegitimadora de las funciones del Estado parece haber arraigado más rápidamente en los sectores medios altos, que son los que solucionan sus necesidades sociales en el sector privado, consumiendo prestaciones de buen nivel, que además los proveen de mayor status; y que no obtienen ventaja alguna de los sistemas públicos de seguridad social. Este grupo potencia sus opiniones en la medida en que su dominio de la cultura, su consumo de información, su presencia y participación en los medios le confiere más representatividad de la que realmente le corres-

ponde atendiendo a su número estricto. Seguramente esto mismo ha ocurrido en nuestro país, donde los sectores medios altos y altos beneficiados por la aplicación de este modelo neo-conservador no sólo deslegitiman el EB, sino que, con su presencia reiterada en los medios imponen modas y modelos de conducta alternativos.

Crisis de representación y fragmentación social: el dominio político muestra la presencia de nuevos actores y relaciones de fuerza. La crisis de representación política acentúa la debilidad de los partidos políticos para jugar el papel de agregadores-articuladores de los intereses de la población. Los funcionarios del sector público tienden a carecer de representatividad y competencia, en tanto la casi totalidad de la clase política está sospechada de corrupción. Empero, a diferencia de décadas anteriores, la salida autoritaria, por la vía de un golpe militar ha dejado de representar una opción, desde que en el campo internacional se propugna el sostenimiento de las democracias (aunque sólo sean formales) y las propias FFAA no han podido superar el descrédito de su última intervención. El espacio dejado por los debilitados partidos políticos, sindicatos y FFAA no ha sido ocupado por actores del mismo peso. Los movimientos y organizaciones sociales impulsan los principales cuestionamientos al modelo neo-conservador, pero reaccionando sólo frente a problemas sectoriales puntuales. Las protestas contra casos de violencia policial, los reclamos del sector pasivo, las recientes marchas de motociclistas para garantizar su derecho de circulación por el microcentro porteño, no alcanzan una magnitud tal como para conmover al sistema y provocar la revisión de la política liberal. Muchas veces se trata de organizaciones recientemente formadas, poco institucionalizadas y que no aspiran a confrontar en el campo político. En la medida en que mantienen reclamos sectoriales muy específicos, es poco probable que puedan articular un programa común de reclamos, lo suficientemente convocante como para influir en el plano político.¹⁵

La creciente fragmentación del campo social -cuyos tejidos fueran profundamente dañados por la última dictadura militar- ha redundado en desorganiza-

¹⁵ Quizá la excepción más significativa estuvo dada por la llamada "Marcha Federal" que a mediados del año 1994 convocó a sectores sociales, gremiales y políticos de todas las regiones del país.

ción y desinstitucionalización. El gobierno menemista no ha intentado la reinstitucionalización de la sociedad civil, por el contrario la preeminencia del Ejecutivo sobre los otros poderes, y del Ministerio de Economía sobre las demás áreas de gobierno, muestran una inédita concentración del poder y un marcado desequilibrio institucional (Nun, 1994; García Delgado, 1994). El propio Partido Justicialista sigue operando alrededor de un puñado de caudillos provinciales que concentra el poder en sus manos. Cierta "propensión cesarista" ha sido tradicional en el Justicialismo (Nun, 1994), lo que redundaba en populismo, centrado sobre la figura de un líder carismático. En tal sentido es evidente que Menem ha logrado resucitar esa tradición luego de los intentos de los "renovadores" por institucionalizar el justicialismo como un partido político más.

Políticas sociales: en el dominio de las políticas sociales, mientras aumentan los sectores excluidos del mercado de trabajo y de consumo, el Estado se muestra cada vez más prescindente. Como parte de la lógica de la privatización de las responsabilidades sociales, el Estado des-invierte en educación primaria, salud y aún en policía; crecen en consecuencia los indicadores de pobreza, abandono escolar y deterioro de la salud de la población (mayor mortalidad infantil, desnutrición, enfermedades infecciosas). En los espacios segregados urbanos conviven víctimas y victimarios en permanente choque: vemos así como un 'bolichero' mata de un tiro a un adolescente que le roba una garrafa de gas y un adolescente mata a un vecino o a un taxista para arrebatarle unos pocos pesos. Sobre este tipo de conflicto manifiesto se monta un discurso alarmista y reaccionario que resulta en compra de armas, privatización de la defensa y más violencia; pero difícilmente en análisis concienzudo del contexto estructural que propicia el surgimiento de conductas delictivas y respuestas violentas.

Finalmente, a modo de síntesis pueden señalarse tres cuestionamientos básicos que se le hacen al modelo neo-conservador vigente en esta etapa flexible de acumulación capitalista: 1) redundancia en elevadas tasas de desempleo; 2) propicia una mala asignación de recursos sociales, y 3) el supuesto de competencia perfecta no es válido (Lo Vuolo, op. cit.: 78). Estas falencias aparecen de manera sobresaliente en el caso particular de nuestro país: el desempleo ha alcanzado niveles nunca antes vistos; la asignación

de recursos deja fuera un cada vez más amplio y variado número de excluidos: los llamados 'nuevos pobres', las economías regionales, los pequeños y medianos empresarios, las explotaciones rurales familiares, el sector pasivo, etc. y, finalmente, la competencia perfecta está lejos de alcanzarse en una economía como la nuestra, cada vez más concentrada en manos de unos pocos grupos económicos que, a sus negocios anteriores han sumado las empresas del Estado adquiridas a precio vil. El análisis que propone el neo-liberalismo no condice con las necesidades político-institucionales de una sociedad post-industrial extremadamente compleja. Suponer que el libre juego de los mercados y el retiro del estado asegurará una reinserción de nuestro país en la economía mundial, en condiciones de garantizar el desarrollo para todos es, *prima facie*, una falacia.

El ocaso de los Actores Colectivos

Todos estos procesos inciden fuertemente, no sólo sobre la estructura de clases -i.e. Susana Torrado (1992) demuestra que se ha producido una creciente asalarización de las clases medias, junto con una desasalarización de la clase obrera- sino también sobre las formas de percibir y definir la pertenencia e identidad social y por tanto, sobre la constitución de los actores sociales colectivos. A la creciente desconfianza resultante del deterioro del tejido social, de la incertidumbre, de la mayor competencia por recursos cada vez más escasos, se suma una ideología individualista y hedonista, asentada en la valorización de la competencia a ultranza y del prestigio basado en el consumo ostentoso, más que en la ética y la conducta moral. Consecuentemente, las posibilidades de organización popular para defenderse del modelo conservador y autoritario son relativamente escasas. Hay una atomización de las demandas porque se han pulverizado las grandes entidades sociales representativas de los principales sectores sociales. La condición de exclusión obliga a buscar alternativas variadas y combinadas de sobrevivencia: un trabajo escasamente remunerado, alguna changa, ayuda estatal, ayuda familiar; todo esto ocupa la mayor parte del tiempo de la gente impidiendo dedicar esfuerzo a toda forma de participación en acciones colectivas que no redunden en un inmediato retorno económico.

Desde este punto de miras, Tenti Fanfani (op. cit.) encuentra poco probable un enfrentamiento entre

“integrados” y “excluidos”, desde que no constituyen dos bloques claramente definidos. Los últimos no tienen, por otra parte, ni los medios ni los canales de expresión que les permitan constituirse y participar organizadamente en el escenario político. La creciente incapacidad económica, social e ideológico-política, de los sectores sociales subordinados para constituirse en actores colectivos capaces de hacer sentir su voz y de participar en forma sistemática y organizada en el campo de las políticas públicas ha derivado en los últimos años en manifestaciones espontáneas de violencia (i.e. los saqueos de supermercados de 1990, el “Santiagazo”), que si algo reflejan, es la incapacidad de los excluidos para canalizar sus demandas y disputar con éxito los recursos sociales estratégicos que determinan la calidad de vida.

El ocaso de los grandes actores sociales colectivos como protagonistas del desarrollo social (sindicatos y organizaciones empresariales) y la multiplicación de fuentes de identidad colectiva -la empresa, el género, la edad, el lugar de residencia, la etnia, el oficio, el título profesional, etc.- otorgan mayor eficacia a las mediaciones simbólicas y políticas, restando significación a los determinismos económicos. A través de los multimedia e hipermedia, periodistas, intelectuales y productores/difusores de representaciones, imágenes, visiones del mundo, creencias y modelos de conducta, tienen hoy mayor incidencia en la formación de la opinión pública y en la construcción del ‘sentido común’ de la población. La mediatización ha influido sobre las formas de expresión y las prácticas políticas. Los ciudadanos se convierten en un auditorio indiferenciado y pasivo que participa de los acontecimientos por TV o contestando una encuesta, pero ya no hay movilizaciones masivas. El propio menemismo ha impulsado una radical desmovilización de su base política, suspendiendo durante sus cinco años de gobierno todo festejo masivo del “17 de octubre” o del “1° de Mayo”. Durante la conmemoración del vigésimo aniversario de la muerte del General Perón, el presidente Menem recurrió a un artículo periodístico publicado con su firma en un diario que difícilmente sea leído por el común de los afiliados justicialistas (“Ambito Financiero”, 01/07/1994). El Justicialismo ha desperonizado su discurso,¹⁶ sus símbolos y los espacios en los que dramatizaba y escenificaba su política: hoy la Plaza de Mayo está vacía. Ello se vincula con la creciente mediatización de la televisión en

la política, con la imagen de los políticos construida por expertos en opinión y psicólogos sociales. Pero también tiene su origen en los apoyos políticos que sostienen al presente gobierno. Mientras el General Perón hizo de la clase obrera “la columna vertebral de su movimiento”, a la que convocaba de tanto en tanto a un diálogo sin intermediarios; Menem consigue sus apoyos en poderes externos como el gobierno de los EEUU, el FMI, el Banco Mundial, o los grandes inversores extranjeros y para esos poderes las movilizaciones populares no son deseables sino peligrosas.

En el plano de la conciencia colectiva, se vislumbran dos tendencias significativas: 1) el desplazamiento, al menos parcial, de las viejas ideologías de la justicia social, el derecho social y la equidad, que presidieron la conformación de los sistemas públicos de prestaciones sociales de carácter universalista del EB y, 2) la emergencia de una tendencia a ejecutar políticas sociales estructuradas a partir de un mix ideológico donde se combinan elementos relacionados con la idea de peligrosidad social y viejas consideraciones de orden moral (Grassi, *et al.*, 1994). En años recientes la política social oficial se ha orientado hacia los denominados ‘pobres estructurales’ (Minujín, 1992) y en menor medida hacia los desocupados resultantes del desempleo incrementado por el ajuste estructural. Empero, en el plano discursivo no se les reconoce ningún derecho. La actual política social apunta mucho más a “controlar el orden que a consumir un derecho” (Grassi, *et al.*, 1994; García Delgado, 1994); ejemplo de ello son los PIT (‘programas intensivos de trabajo’) y los ‘microemprendimientos económicos’, que constituyen paleativos momentáneos y no parte de un programa de desarrollo social más ambicioso.

El escenario probable de este fin de siglo en donde la Argentina deberá luchar por su espacio, también incluye la crisis de la configuración estatal clásica y el desarrollo alternativo de formaciones supranacionales (Mercosur, CEE,) y subestatales (provincias, municipios, gobiernos locales). Como señala Tenti Fanfani (1993), asistimos a una gradual pérdida de sentido de la política como intervención sobre el conjunto de la sociedad a partir de un centro con capacidad de producir correcciones en la distribución desigual de recursos. Por consiguiente, es probable que se acentúe la tendencia a la descentralización de las políticas públicas: traspaso a las provincias de la planificación, implementación y financiamiento del sistema educativo y hospitalario y de los programas sociales. La delegación de funciones desde el Estado nacional a

¹⁶ Ante la cercanía de las elecciones, y luego de 5 años de escasas referencias a sus banderas históricas, el Justicialismo está re-peronizando aceleradamente su discurso.

los gobiernos provinciales juega también un papel importante en el proceso de legitimación del ajuste estructural. Las culpas por los costos sociales se achacan a los gobiernos provinciales que no practicaron el ajuste correspondiente, poniendo el plan maestro a salvo de toda crítica.

El distribucionismo parece ser un componente inherente del populismo, que, en su ausencia se torna inviable (Nun, 1994). El giro en las preferencias populares en la elección para constituyentes del 10 de abril de 1994, la Marcha Federal (julio de 1994), el rápido crecimiento del Frente Grande, el hecho mismo de que el presidente Menem, muy a pesar de sus deseos, no puede presentarse en público con la total certeza de no ser abucheado, parecen apuntalar esta conclusión. Podría suponerse que un partido de tradición populista que impulsa un programa de gobierno conservador y exclusionario pierda parte de su sustento popular. Pero el amplio apoyo que el plebiscito de la provincia de Buenos Aires otorgó al gobernador Duhalde (noviembre de 1994) y las tendencias favorables al gobierno que señalan las encuestas electorales hacia febrero de 1995 abonan el camino para una interpretación diferente. La administración Menemista muestra claramente que es posible impulsar un modelo conservador, en extremo exclusionario, combinado con dosis calculadas de populismo. El distribucionismo puede graduarse en tiempo y lugar y así lo ha hecho la administración menemista repartiendo alimentos, ropa, títulos de propiedad, puestos y contratos en la burocracia estatal en los momentos y lugares estratégicos: i.e. en el conurbano bonaerense, que tiene una participación extremadamente significativa en el padrón electoral único que rige la elección presidencial según la constitución reformada).

Las políticas asistenciales, definidas por las necesidades inmediatas de la población son particularmente resistentes al cambio, sugiere Tenti Fanfani (1991), y es precisamente en este dominio donde la antigua tradición del "estado paternalista" predomina con mayor fuerza y opera a contrapelo de políticas más progresistas en materia de asistencia social. No obstante, las políticas del actual gobierno no son simplemente un resabio de viejas prácticas tendientes a desaparecer, sino populismo redistributivo y paternalista de viejo cuño, manejado por caudillos partidarios y sabiamente dosificado. Esta cuota de distribucionismo -que no está destinado a transformar la sociedad sino a apagar los incendios que el propio

modelo produce y a ganar elecciones- es el complemento necesario del modelo neo-conservador, es el componente que confiere legitimidad a un gobierno cuya hegemonía es esencialmente negativa: centrada en prédica del ajuste como salida única y la amenaza de la pérdida de la ganada estabilidad si se cambia el rumbo neo-liberal.

Este distribucionismo de ocasión obliga a reposicionamientos en el plano discursivo. En tal sentido, el Partido justicialista ha reflatado su retórica populista, siguiendo la estrategia explícita de re-peronizar el discurso para las elecciones presidenciales de mayo de 1995. Es así que el presidente Menem construye su retórica electoral apelando, no sólo a la estabilidad alcanzada, sino a "nuestros queridos hermanos", "amados niños", invocando permanentemente a Dios, rescatando los símbolos del partido, afirmando la identidad justicialista del menemismo y prometiendo la justicia social para los próximos años. En tanto mandatario, el presidente Menem detenta "el monopolio de la violencia simbólica legítima" -es el *rex*, aquel a quien incumbe trazar, mediante la palabra las fronteras entre los grupos, entre lo sagrado y lo profano, el bien y el mal (Bourdieu, 1990: pp. 294-298)- y está en posición de nombrar y hacer existir, gracias a la nominación, "un país democrático", "en crecimiento", "con una economía sana", "con una justicia independiente"; "un país que ha eliminado la corrupción estatal" y que "acepta de buen grado la más absoluta libertad de prensa".

Cabe preguntar, si en los próximos años, el "poder oficial de nominación" será una herramienta hegemónica suficiente.

Bibliografía

Bourdieu, Pierre

1990 *Sociología y Cultura*. México, Grijalbo.

Canitrot, Adolfo

1980 La Disciplina como objetivo de la política económica. Un ensayo sobre el Programa Económico del Gobierno Argentino desde 1976. En: *Revista Desarrollo Económico*, Nro. 76, Vol. 19. Buenos Aires.

Escobar, Arturo

1992 Imagining a Post-Development Era? Critical Thought, Development and Social Movements. *Social Text*. 31/32 Vol 10 N° 2-3. pp. 20-56.

Escobar, Arturo

1988 Power and Visibility: Development and Invention and Management of the Third World. *Cultural Anthropology*. 3 (4).

Ferguson, James

1990 *The anti-politics machine. "Development," depoliticization, and bureaucratic power in Lesotho*. Cambridge. Cambridge University Press.

Fröebel, Folker., Heinrichs Jürgen y Kreye Otto

1990 *La nueva división internacional del trabajo. Para estructural en los países industrializados e industrialización de los países en desarrollo*. España, Siglo XXI.

García Delgado, Daniel R.

1994 *Estado y sociedad. La nueva relación a partir del cambio estructural*. Buenos aires. FLACSO.

Gramsci, Antonio

1992 Americanism and Fordism. In: *Selections from the Prison Notebooks*. New York, International Publishers.

Grassi, Estela; Hintze, Susana & Neufeld, María Rosa

1994 *Políticas Sociales. Crisis y Ajuste Estructural*. Buenos Aires, Espacio Editorial.

Harvey, David

1990 *The Condition of Postmodernity*. Cambridge, Basil Blackwell.

Isuani, Ernesto

1991 Bismarck o Keynes: ¿quién es el culpable?. Notas sobre la crisis de acumulación. En: Isuani E; Lo Vuolo R. y Tenti Fanfani E. *El estado Benefactor. Un paradigma en crisis*. Buenos Aires, Miño Dávila. Ciepp.

Lo Vuolo, Rubén

1991 Economía Política del Estado de Bienestar: mitología popular y keynesianismo populista. En: Isuani E; Lo Vuolo R. y Tenti Fanfani E. *El estado Benefactor. Un paradigma en crisis*. Buenos Aires, Miño Dávila. Ciepp.

Minujín, Alberto

1992 En la rodada. En: Minujín et al, *Cuesta abajo. Los nuevos pobres: efectos de la crisis en la sociedad argentina*. Buenos aires, Unicef. Losada.

Mishra, Ramesh

1989 El Estado de Bienestar después de la crisis: los años 80 y más allá. En: Muñoz de Bustillo, Rafael (compilador) *Crisis y futuro del Estado de Bienestar*. Madrid, Alianza.

Muñoz de Bustillo, Rafael

1989 Introducción: Economía de mercado y Estado de bienestar. En: Muñoz de Bustillo, Rafael (compilador) *Crisis y futuro del Estado de Bienestar*. Madrid, Alianza.

Murmis, Miguel y Portantiero, Juan Carlos

1971 *Estudios sobre los orígenes del peronismo*. Buenos aires, siglo XXI.

Nieburg, Federico G.

1993 A Invenção do peronismo e a constituição das ciencias sociais na Argentina. Tese de Doctorado Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro (dactilografiado).

Nun, José

1994 Populismo, representación y menemismo. *Revista Sociedad*. Nro. 5. oct/94. pp. 93-121.

Offe, Claus

1992 *Partidos políticos y nuevos movimientos sociales*. Madrid, Ed. Sistema.

Roberti, Paolo

1989 Reflexiones críticas sobre los Principios e instrumentos del 'Estado de Bienestar' con referencia al caso italiano. En: Muñoz de Bustillo, Rafael (compilador) *Crisis y futuro del Estado de Bienestar*. Madrid, Alianza.

Sabel Charles F.

1985 *Trabajo y Política. La división del trabajo en la industria*. España, Ed. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Sigal Silvia y Verón Eliseo

1988 *Perón o Muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista*. Buenos Aires.

Tenti Fanfani, Emilio

1991 Pobreza y política social: más allá del neosistencialismo. En: Isuani E, Lo Vuolo R. y Tenti Fanfani E. *El estado Benefactor. Un paradigma en crisis*. Buenos Aires, Miño Dávila. Ciepp.

Tenti Fanfani, Emilio

1993 Cuestiones de Exclusión Social y Política. En: Alberto Minujín (editor): *Desigualdad y Exclusión Desafíos para una política social en la Argentina de fin de siglo*. Buenos Aires. Unicef-Losada. pp. 241-274.

Therborn Göran

1989 Los retos del Estado de Bienestar: la contrarrevolución que fracasa, las causas de su enfermedad y la economía política de las presiones de cambio. En: En: Muñoz de Bustillo, Rafael (compilador) *Crisis y futuro del Estado de Bienestar*. Madrid, Alianza.

Torrado, Susana

1992 *Estructura social en la argentina 1945-1983*, Buenos Aires. Ediciones de la Flor.

Touraine, Alain

1985 *Los movimientos sociales*. Buenos Aires. Almagesto. Colección Mínima. Nro. 16.

Wolf, Eric

1987 *Europa y la gente sin historia*. México, FCE.